

Justicia e Impunidad

1

Balance de las recomendaciones anteriores

11 países hicieron recomendaciones a Colombia en el EPU 2018 dirigidas a adoptar medidas eficaces para luchar contra la impunidad en casos de graves violaciones a los derechos humanos. Sin embargo, el cumplimiento de dichas recomendaciones es débil, pues existen barreras para el acceso a la justicia, la reparación a las víctimas y la falta de condenas a los responsables de los crímenes.

A pesar de que Alemania, España, Francia recomendaron combatir la impunidad por delitos cometidos durante el conflicto armado, garantizando la independencia del poder judicial, las víctimas se encuentran insatisfechas por la falta de reconocimiento de responsabilidad y aportes a la verdad de altos mandos militares en los macrocasos abiertos en la Jurisdicción Especial para la Paz, particularmente aquellos relacionados con ejecuciones extrajudiciales y paramilitarismo.

Bélgica, Reino Unido y Suecia, recomendaron luchar contra la impunidad e investigar a los responsables en casos de violencia sexual y basada en género. No obstante, no se ha dotado a las instituciones de la capacidad suficiente para atender las denuncias de las víctimas, especialmente en perjuicio de niñas y mujeres. A raíz de la pandemia, las mujeres y niñas se enfrentaron con barreras para denunciar y recibir atención en este tipo de violencias.

Desafíos

Investigaciones sobre ejecuciones extrajudiciales, tortura y desapariciones forzadas. A pesar de los avances de la justicia transicional, persiste la impunidad en materia de ejecuciones extrajudiciales. Las víctimas se encuentran de frente a riesgos en la seguridad y los comparecientes no están aportando en la verdad en escenarios como la JEP.

A su vez, existen barreras en la justicia ordinaria para la investigación en estos casos; desde el 2016 permanecen congeladas las investigaciones y la JEP se ha enfocado en juzgar militares ya procesados y en mandos medios. Es preocupante la posibilidad de que estos casos permanezcan en la impunidad debido al proceso de priorización y selección que ha adelantado la JEP. (1)

Los índices de impunidad en materia de tortura son elevados. Entre el 2017 y el 2022, de 1.183 procesos penales por delitos asociados a la tortura, solo el 4,56 % se encuentra en ejecución de penas y el 9,89% en juicio.

En el mismo periodo, sobre desapariciones forzadas, Se reportan 13.129 procesos activos por desaparición forzada, de los cuales el 0.42 % se encuentran en juicio y el 0,21 % en ejecución de penas. Los demás procesos están en etapas que no contribuyen a satisfacer el derecho a la verdad, la justicia y reparación de las víctimas de este flagelo.

(1) Disponible en: <https://www.jep.gov.co/jepcifras/JEP-en-Cifras-dicimbre-9-de-2022.pdf>.

Responsabilidad de agentes del Estado y terceros civiles. La responsabilidad de terceros civiles y agentes del Estado no integrantes de la Fuerza Pública en el conflicto armado no ha sido investigada exhaustivamente. De 16.772 compulsas de copias derivadas de Justicia y Paz contra ellos, sólo se han abierto 98 procesos penales, sin que la Procuraduría indague la participación de servidores públicos. La investigación de altos funcionarios del Estado continúa en la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes, un órgano político sin autonomía ni imparcialidad en sus actuaciones.

Las investigaciones por muertes de civiles a manos de integrantes de la Fuerza Pública fueron asumidas inicialmente por la Justicia Penal Militar y Policial, a pesar de que en 2021 la CIDH instó al Estado a que estos casos fueran conocidos por la justicia ordinaria. La entrega de información de esta jurisdicción a la Fiscalía, la JEP y la CEV ha sido precaria.

Investigaciones por delitos contra la libertad, integridad y formación sexual. Persiste la impunidad generalizada por delitos contra la libertad, integridad y formación sexual. Un ejemplo de ello, son los casos de violencia sexual en el marco del conflicto armado, donde solo el 1,76% estaban en etapa de juicio al primero de octubre de 2019. Así mismo, solo el 16,9 % de los casos de violencia intrafamiliar se encontraban en etapa final a corte de 2021. Para los casos de violencia sexual el 6,85 % de casos se encuentran en juicio y en casos de feminicidio solo el 33,81 %

Recomendaciones

1. Aumentar los esfuerzos tanto en la justicia transicional como en la justicia ordinaria, para identificar a los máximos responsables, incluyendo a terceros civiles y agentes del Estado; y poner en marcha esfuerzos de articulación entre la Fiscalía y la JEP.
2. Delimitar de manera estricta la competencia de la Justicia Penal Militar y Policial, para que no asuma investigaciones sobre graves vulneraciones a los derechos humanos y se limite su actuación a casos relacionados estrictamente con el servicio activo, siendo necesaria una adecuada publicidad del denominado “derecho operacional”.
3. Establecer espacios y mecanismos al interior de todas las jurisdicciones que garanticen la real y efectiva participación de las víctimas en la toma de decisiones sobre atribución de responsabilidad a los responsables y adopción de medidas de reparación y garantías de no repetición.
4. Aplicar medidas dirigidas a fortalecer el marco institucional para garantizar los derechos a la verdad, la justicia, la reparación y la no repetición garantizando que se investigue y juzgue a los responsables y se disminuya la impunidad generalizada en estos casos.